



Consejo Económico y Social

Distr. general
27 de enero de 2014
Español
Original: inglés

Comisión de Población y Desarrollo

47º período de sesiones

7 a 11 de abril de 2014

Tema 4 del programa provisional*

**Debate general sobre la experiencia nacional en
asuntos de población: evaluación del estado de la
ejecución del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo**

Declaración presentada por Amnistía Internacional, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

* E/CN.9/2014/1.



Declaración

Amnistía Internacional acoge con beneplácito la oportunidad que ofrece el 47º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de evaluar el estado de la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo provocó un cambio sin precedentes en la forma de pensar sobre la población y el desarrollo, al ampliar la atención internacional con respecto a las consideraciones limitadas de control de la población para adoptar una visión más global que reflejaba la importancia de la igualdad de género y los derechos humanos. El Programa de Acción resultante afirmó que las políticas de población no podían seguir operando de forma aislada, fuera de las agendas económica y de desarrollo social, sobre todo en lo referente al empoderamiento de las mujeres. También proporcionó un marco sólido para un enfoque de la salud y los derechos sexuales y reproductivos completo y basado en los derechos humanos que específicamente reconoce que la igualdad de género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para que las estrategias de población y desarrollo sean efectivas.

Desde 1994, se han dado varios pasos importantes para materializar los compromisos políticos que se recogen en el Programa de Acción. Sin embargo, en general los progresos han sido desiguales y más lentos de lo deseable en todas las regiones. Por ejemplo, pese a que se han producido avances positivos en la prestación de determinados servicios de salud reproductiva, como la atención prenatal, el progreso ha sido inadecuado respecto a otros compromisos, como el acceso al aborto sin riesgo y la educación sexual completa.

Además, muchos Estados no han abordado de forma adecuada barreras importantes que impiden que se materialicen de forma efectiva la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, como las leyes y políticas discriminatorias, así como las actitudes y prácticas discriminatorias evidentes en las instituciones del Estado, las comunidades y las familias. La violencia por razón de género y la experiencia de formas múltiples y entrecruzadas de discriminación siguen exacerbando la marginación y limitando la capacidad de mujeres y niñas para disfrutar plenamente de su autonomía personal y de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.

También es necesario reforzar los compromisos políticos establecidos en el Programa de Acción para reflejar mejor los avances normativos y los consensos políticos progresivos sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos desarrollados por órganos internacionales y regionales durante los últimos dos decenios.

Como parte del examen de las operaciones del Programa de Acción, en las consultas nacionales, regionales y temáticas celebradas en 2012 y 2013 se reconocieron los retos y lagunas existentes en su aplicación. Los documentos finales de muchas de estas consultas no solamente reafirmaron los compromisos políticos hechos en 1994, sino que también reconocieron los avances en las normas de derechos humanos conseguidos desde entonces, y sugirieron una protección más sólida y completa para la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

En el 47º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, los Estados deben tener en cuenta el consenso sólido y progresivo alcanzado durante las consultas de examen relativas a los retos y lagunas en la aplicación del Programa de Acción. La igualdad de género y la plena realización de todos los derechos humanos deben situarse en el centro de todos los debates durante el período de sesiones y deben tener cabida en las deliberaciones de la agenda para después de 2015. Los Estados deben garantizar que el actual período de sesiones reafirme un enfoque sólido y progresivo para que todas las personas puedan disfrutar de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Concretamente, Amnistía Internacional insta a los Estados a que reconozcan la necesidad de reforzar los compromisos en los ámbitos que se detallan a continuación, en los que el avance hasta el momento ha sido inadecuado.

Derechos reproductivos y sexuales

Los derechos reproductivos y sexuales deben reconocerse, protegerse y aplicarse plenamente como derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos engloban varios derechos y libertades asociados a la conservación de la dignidad en el ámbito sexual y reproductivo, entre ellos los derechos a la salud, la vida, la información, la no discriminación, la libertad de expresión y el derecho a elegir cuántos hijos se quiere tener y cuándo, si es que se desea tenerlos.

Los Estados deben respetar, proteger y cumplir estos derechos, y aplicar leyes, políticas y programas que empoderen a todas las personas para que tomen decisiones informadas y tengan autonomía sobre sus elecciones relativas a la sexualidad y la reproducción, sin coacción, discriminación o violencia. Los Estados también deben adoptar medidas destinadas a reformar leyes, políticas y directrices que impongan sanciones penales o punitivas al ejercicio de estos derechos. Estas incluyen, entre otras, leyes que penalicen el aborto, el comportamiento durante el embarazo, las relaciones entre personas del mismo sexo y las relaciones sexuales consentidas entre adultos y entre adolescentes, que no respeten los principios de la evolución de la capacidad y el consentimiento válido. Los Estados deben proteger además los derechos sexuales y reproductivos de las personas de las violaciones cometidas por agentes no estatales.

Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Los Estados tienen la obligación inmediata y continua de garantizar la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, siguen existiendo grupos concretos subatendidos y excluidos de las prestaciones de los programas sobre salud y derechos reproductivos y sexuales. La discriminación extendida por razón de género ha impedido en gran medida el avance y siguen existiendo violaciones de los derechos humanos, como el matrimonio infantil, a edad temprana y forzado; la esterilización forzada y otras prácticas nocivas; así como la negación de la autonomía de las mujeres y las niñas para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva sin discriminación, coacción y violencia.

Igualdad de género

Los Estados deben revisar y reformar todas las leyes, normativas y políticas que tengan un efecto discriminatorio sobre las mujeres, las niñas y las personas con identidades sexuales diversas, además de aplicar programas y políticas dirigidos a promover la igualdad de género y a eliminar los estereotipos. Las formas de discriminación que pueden complicar la experiencia de la injusticia y la marginación de mujeres y niñas, así como de las personas no conformes, son diversas y se entrecruzan. Los Estados tienen la obligación de abordar estas formas de discriminación, incluso mediante políticas y programas específicos.

Además de los programas dirigidos a las mujeres y las niñas, los gobiernos también deben desarrollar programas destinados a hombres, niños, familias y miembros de la comunidad que aborden las actitudes y creencias que constituyen la esencia de la discriminación generalizada por motivo de género. Las medidas deben incluir la prevención de la violencia por razón de género, el acceso de las víctimas que sobreviven a este tipo de violencia a una reparación efectiva y la eliminación de la impunidad de los autores. En aquellos casos en que se afirme que determinadas formas de violencia por razón de género están justificadas por la cultura, la religión o la tradición, los Estados deben promulgar leyes que prohíban dichas prácticas nocivas y conciencien sobre sus efectos perjudiciales para la salud.

Los Estados también deben recopilar datos desglosados por género y otros grupos identificados como víctimas de la discriminación, con el fin de garantizar que se avanza en la realización de los derechos sexuales y reproductivos para todos.

Acceso universal a la salud sexual y reproductiva de calidad, completa e integrada

El avance hacia la consecución del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva ha sido insuficiente y desigual. La mortalidad materna sigue siendo inaceptablemente alta, sobre todo entre las mujeres más pobres y marginadas. Con frecuencia no se dispone de los servicios adecuados, y además no son suficientemente accesibles, asequibles o de buena calidad. Por ejemplo, la falta de acceso a parteras cualificadas y el aborto en condiciones de riesgo siguen contribuyendo a una proporción significativa de la mortalidad materna.

Mujeres y niñas siguen enfrentándose a una serie de barreras legales, sociales, culturales, económicas y estructurales para acceder a los servicios que necesitan, como los costes de transporte y las tasas por uso, el trato discriminatorio por parte del personal médico o el requisito de contar con el consentimiento de un tercero para acceder a la planificación familiar o a anticonceptivos.

El acceso vital a los servicios de salud sexual y reproductiva con frecuencia también se ve gravemente comprometido por la discriminación institucional basada en la orientación sexual, la identidad de género, la raza, la edad, el idioma, el grupo étnico, la religión, la residencia, la nacionalidad, la condición de indígena, la discapacidad, la salud, el estado civil o la situación económica. Por ejemplo, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y el suministro de información en la materia sigue orientándose hacia la experiencia y las necesidades de las personas que se adaptan a determinados papeles asignados al género. En muchos países la exclusión, el acoso y la discriminación por parte del personal

sanitario debido a la identidad de género o la orientación sexual real o percibida de una persona sigue constituyendo una grave preocupación.

Educación sexual completa

Los Estados deben garantizar que niños y adolescentes reciban una educación sexual completa basada en información precisa sobre sexualidad, salud sexual, reproducción, derechos humanos y empoderamiento, no discriminación, igualdad de género y papeles asignados al género, comportamiento sexual, abuso sexual, violencia por razón de género y prácticas nocivas. Estos programas deben tener en cuenta las cuestiones de género, tener base empírica y respetar la evolución de la capacidad de niños y adolescentes, y deben facilitarles la información y los conocimientos necesarios para gestionar la adopción de decisiones y la autonomía personal.

Participación

A la hora de decidir sobre las prioridades y de diseñar, planificar, aplicar y supervisar las políticas y los programas relacionados con la salud y los derechos reproductivos y sexuales, los Estados deben crear oportunidades para una participación igualitaria, efectiva y significativa de todas las personas, sobre todo de los grupos marginados o aquellos a los que afectan dichas iniciativas. Los Estados deben garantizar asimismo que los defensores de los derechos humanos de las mujeres puedan llevar a cabo sus actividades sin coacción, intimidación y ataques.

Rendición de cuentas y reparaciones efectivas con respecto a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos

Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho a una reparación efectiva y a una compensación. En muchos países no existen mecanismos eficaces para presentar demandas cuando se han visto violados los derechos reproductivos y sexuales o el derecho a la salud de las personas, lo que deja a las víctimas con escasos recursos o sin ellos.

Los Estados deben controlar de forma efectiva la aplicación de políticas y programas de salud sexual y reproductiva y proporcionar a todas las personas, sobre todo a aquellas que se encuentran en riesgo de discriminación, mecanismos para abordar sus reclamaciones. Los Estados también deben garantizar que todas las personas puedan recurrir a la ley para hacer valer sus derechos sin discriminación y acceder a reparaciones efectivas cuando se violen su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
